DOCTORA TERESA NUQUES MARTÍNEZ-JUEZA SUSTANCIADORA EN EL CASO NO. 1798-21-JP

Héctor Patricio Jines Obando y Esperanza Del Pilar Araujo Escobar, jueces del Tribunal de Garantías Penales con Sede en el Cantón Pastaza dando respuesta a lo solicitado mediante auto dictado el 30 de mayo del 2023, dentro del Caso 1798-21-JP, ante usted comparecemos y manifestamos lo siguiente:

PRIMERO: Mediante acta de sorteo de fecha 5 de mayo del 2021, a las 14H16 se radicó la competencia en este Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Pastaza integrado por los doctores Héctor Patricio Jines Obando, Frowen Bolívar Alcivar Basurto y Esperanza del Pilar Araujo Escobar (ponente) para conocer y resolver la demanda de acción de protección No. 16171202100006 presentada por los señores Ángel Heriberto Sánchez Sani, quien es cónyuge de la señora Beatriz Azucena Moreano en contra del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza.

SEGUNDO: Con fecha 6 de mayo del 2021, a las 14H20 se avocó conocimiento de la causa, admitida a trámite se señaló el martes 11 de mayo del 2021 a las 10H15 para llevar a cabo la audiencia constitucional; diligencia que se llevó a cabo el día y hora previsto: en la audiencia luego de escuchar a las partes y practicarse la prueba, el Tribunal procedió deliberar y resolvió negar la acción de protección por no haberse evidenciado vulneración de derecho humano alguno, notificando la sentencia debidamente motivada y por escrito con fecha 20 de mayo del 2021, a las 10H54.

TERCERO: En la sentencia, los jueces realizamos un análisis bajo el horizonte de los requerimientos de los legitimados activos, teniendo en cuenta que dentro de la acción de protección manifestaron entre otras cosas que: "son propietarios de un lote de terreno rural, signado con el Nro. 12, ubicado en la parroquia Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, lote de terreno que se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos; NORTE, en 10.00m., con proyecto de calle; SUR, en 46m., con proyecto de calle: NOROESTE, con el lote No. II, 89m., y, SURESTE, en 35m., con área de protección y en 50,50m., con Aura Alarcón, de la superficie de 2.907,75 metros cuadrados, que con fecha 12 de agosto del 2020 mediante Resolución Administrativa Nro. GADMCP-2020-ALCALDIA-0275-RA, el Ing. Edwin Oswaldo Zúñiga Calderón en calidad de Alcalde del Gobierno Municipal del Cantón Pastaza resuelve declarar de utilidad pública con fines de expropiación y ocupación dicho bien, que desde la fecha en que se le notificó con esta resolución al señor Ángel Sánchez Sani no se les ha indemnizado en la forma que la Ley y la Constitución ordenan, pese a no haber realizado ninguna oposición, y que por esta declaratoria de utilidad en la actualidad no pueden realizar ningún acto legal ni una transferencia de dominio a determinada persona porque ya existe este impedimento a través de la Resolución Administrativa, que en varias ocasiones han recurrido tanto de forma verbal cuanto con sendos oficios solicitando al señor Alcalde les justifique el por qué no se procede con la inscripción de la Resolución Administrativa en el Registro de la Propiedad y no se les cancela el valor establecido de acuerdo al avalúo emitido

por los técnicos de la institución, ademan que dicho terreno ya se encuentran construcciones a quienes el Municipio les ha dotado de servicios básicos, que las personas que se encuentran asentados en su bien inmueble no les dejan ingresar, que ellos (legitimados activos) continúan cancelando el pago de los impuestos prediales hasta este año 2021; que no están reclamando el justo pago, que se está tratando de confundir manifestando que han presentado una oposición en cuanto al justo precio, que su petición concreta es que mediante sentencia se acepte la presente acción de protección planteada por cuanto vulnera derechos constitucionales a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso por falta de motivación de la Resolución Administrativa, y al trabajo, y también solicitan que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza concluya el proceso de expropiación hasta su justa indemnización.

CUARTO.- El Tribunal respecto de la vulneración del derecho a la seguridad jurídica alegado por los legitimados activos se pronunció que no existe tal vulneración por cuanto el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: “Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad pública y de interés social de acuerdo con la Ley. A la declaratoria se adjuntará el certificado del registrador de la propiedad; el avalúo establecido por la dependencia de avalúos y catastros del respectivo Gobierno Autónomo Municipal o Metropolitano; la certificación presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para el efecto; y, el anuncio del proyecto en el caso de construcción de obras de conformidad con la ley que regula el uso del suelo. La declaratoria se notificará, dentro de tres días de haberse expedido, a los propietarios de los bienes a ser expropiados, los posesionarios y a los acreedores hipotecarios... La declaratoria de utilidad pública y de interés social se inscribirá en el Registro de la Propiedad. El Registrador de la Propiedad cancelará las inscripciones respectivas, en la parte correspondiente, de modo que el terreno y pertenencias expropiados queden libres, y se abstendrá de inscribir cualquier acto traslativo de dominio o gravamen, salvo que sea a favor de la institución pública que requiere la declaración de utilidad pública y de interés social...Al efecto, el Director Financiero de la Institución o quien haga sus veces, emitirá un certificado, con fundamento en el cual el Ministro respectivo o la máxima autoridad expedirá el acto administrativo correspondiente que se procederá a elevar a escritura pública e inscribir en el Registro de la Propiedad”, entonces se evidenció que el legitimado pasivo ingeniero Oswaldo Zúñiga, Alcalde del GADMCP ha ajustado sus actuaciones a lo que determinan estas normas clara, previas y emitidas antes de dictar el acto administrativo, por lo tanto no existe vulneración a la seguridad jurídica.

QUINTO: Respecto del derecho al debido proceso en la garantía a la motivación, el Tribunal sustentó su decisión teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 98 del Código Orgánico de la Administración, que habla de los actos administrativos y los efectos jurídicos que tiene, además se analizó que el acto administrativo emitido por el legitimado pasivo Ing. Oswaldo Zúñiga ha seguido del debido proceso dispuesto en el artículo 447 del COOTAD y artículo 58 de Ley Orgánica del Sistema Nacional

de Contratación Pública, ya que en el texto de la Resolución Administrativa GADMCP-2020-ALCALDIA-0275-RA que obra de fs. 3 a fs. 6 del proceso, así también ha dispuesto notifique con dicha resolución al propietario del inmueble, en este caso al señor Ángel Heriberto Sánchez Sani, quien es cónyuge de la señora Beatriz Azucena Moreano, lo que ha sido cumplido conforme la razón asentada por el abg. Andrés Espín, secretario General del GAD Municipal de Pastaza, fs. 38 vta.; también se ha dispuesto notificar al Consejo Municipal para dar cumplimiento con lo ordenado en el literal l) del artículo 57 del COOTAD que establece como una de las atribuciones del Concejo Municipal, "Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, resueltos por el alcalde conforme a la ley; y ha ordenado notificar a la registradora de la propiedad con dicha Resolución, lo que también ha sido cumplido, conforme consta a fs. 37; además se tuvo en cuenta que El acto administrativo dictado por el ingeniero Oswaldo Zúñiga goza del principio de legalidad, que su correcto procedimiento corresponde a uno de los Tribunales Contenciosos Administrativos, conforme lo dispone el artículo 31 del Código Orgánico de la Función Judicial que dispone: "Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por quienes ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos, no son decisiones jurisdiccionales; constituyen actos de la Administración Pública o Tributaria, impugnables en sede jurisdiccional", esto en concordancia con el artículo 173 de la Constitución de la República indica: "Los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial"; evidenciándose así que no existe vulneración del derecho al debido proceso en la garantía a la motivación.

SEXTO: Por otro lado, respecto a que no han puesto oposición los legitimados activos a la declaratoria de utilidad pública, se probó que mediante oficio dirigido al señor Alcalde Oswaldo Zúñiga, que en copias certificadas obra de fs. 35 y 36 del expediente, entre otras circunstancias señala que "se opone parcialmente a la resolución GADMCP-2020-ALCALDIA-0275-RA, que esta oposición es en cuanto al avalúo porque el establecido de 45.826.14 no es real ya que del avalúo que se le ha entregado ante su petición es de 49.460.83 como consta en el impuesto predial del año 2019 por lo que ha solicitado que se reforme la Resolución ya señalada, y consecuentemente se establezca el precio justo", sobre este punto el Tribunal nada se pudo pronunciarse por ser asuntos de mera legalidad que explícitamente han puesto de manifiesto en este juicio, debido a que se centra en exigir a la administración pague un justo precio; por lo que incluso se exhortó a los legitimados activos acudan a la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos en el caso de creerse perjudicados.

SÉPTIMO: El Tribunal también evidenció que no se ha vulnerado el derecho a la propiedad alegado por los legitimados activos, por cuanto pese haberse declarado de utilidad pública mediante Resolución GADMCP-2020-ALCALDIA-0275-RA de fecha 12 de agosto del 2020 esta declaratoria no aparece inscrita en el Registro de la Propiedad Municipal del Cantón Pastaza pese a estar dispuesto y notificado, es

decir esta declaratoria no consta en el certificado de gravamen adjuntado como prueba y consta a fs. 7, sin embargo sobre este incumplimiento de la o el Registrador de la Propiedad tampoco podía ser resuelto en la vía constitucional por ser un tema propio de la administración pública municipal; por otro lado **lo que si consta en esta certificación son las inscripciones ordenadas por la Unidad Judicial Civil del Cantón Pastaza respecto de los juicios de prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio seguidos por diferentes personas a los cónyuges Ángel Heriberto Sánchez Sani y Beatriz Asucena Moreano, juicios signados con los números 2014-3110, 2015-00273, 2015-00274, 2015-00563, 2015-0030, demandas propuestas antes de la declaratoria de utilidad pública**, por lo que la vía constitucional no es la idónea para reclamar la posesión, uso y goce de ese bien, las acciones, para que franquee la justicia son la administrativa para que se declare nulo el acto administrativo y la ordinaria respecto de las demandas de la prescripción adquisitiva de dominio presentadas en contra de los legitimados activos.

OCTAVO: Los legitimados activos también dijeron que se ha vulnerado el derecho a la propiedad por cuanto no se ha continuado con el proceso de expropiación manifestando que no existen recursos económicos para proceder al pago, que no se les ha dicho qué es lo que pasó con los recursos que existían al momento de declarar el bien de utilidad pública; al respecto, se presentó como prueba la certificación de fecha 10 de mayo del 2021 suscrita por la ingeniera Lucy Lagos Ninacuri, en su calidad de Directora Financiera del GADMCP mediante la cual certifica que no existe disponibilidad económica para la expropiación a favor del GADMCP de un lote de terreno de propiedad del señor Ángel Heriberto Sánchez Sani, con un avalúo catastral de 45.826.14 partida presupuestaria para saneamiento y urbanización, y que el saldo en esta partida es de 1.532.14, pero este acto, “falta de recursos en la partida presupuestaria 310.840301.001.16.01 denominada Expropiación de Terrenos para Saneamiento y Urbanización”, tampoco procede ser resuelta dentro de esta acción de protección, ya que son actos internos adoptados dentro de la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pastaza; así como tampoco correspondía por esta vía constitucional ordenar al GADMCP continúe con el proceso de expropiación hasta el pago del justo precio como lo han solicitado los legitimados activos ya que es una institución que goza de autonomía económica, administrativa y financiera; por lo tanto al no haberse evidenciado la violación de los derechos constitucionales, no existe un peligro inminente o futuro que lesione un derecho de orden constitucional, y lo alegado sobre la imperfección administrativa, legal, incompleta en su disposición y viabilidad se lo puede impugnar ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo; cognición por la cual se determinó que: a) No existe violación de derechos constitucionales alegados por la defensa de los legitimados activos; y b) No se determina que el acto del cual se impugna pueda lesionar un derecho constitucional y que la vía a la cual se pueda dirigir no fuere adecuada ni eficaz para resolver sobre las formalidades de un acto administrativo; y la vía ordinaria por las demandas de prescripción Extraordinaria Adquisitiva de Dominio existentes desde antes de ser presentada la acción de protección.

NOVENO: La sentencia dictada por el Tribunal fue apelada por lo que el proceso subió para conocimiento y resolución de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, integrada por los doctores Bolívar Enrique Torres Ortiz, Tania Patricia Masson Fiallos y Carlos Alfredo Medina Riofrio quienes de forma unánime han resuelto rechazar el recurso de apelación interpuesto por los legitimados activos, y confirmaron en todas sus partes la sentencia dictada por el Tribunal.

Con el antecedente expuesto damos cumplimiento a lo ordenado por su autoridad; debiendo dar a conocer también que este documento no lo suscribe el doctor Frowen Alcívar B., juez integrante del Tribunal por encontrarse en uso de su derecho a vacaciones.

Notificaciones las recibiremos en los correos electrónicos:
hector.jines@funcionjudicial.gob.ec y esperanza.araujo@funcionjudicial.gob.ec

Héctor Jines Obando
Juez

Pilar Araujo Escobar
Jueza